TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MANIZALES
SALA CIVIL-FAMILIA

Magistrada Sustanciadora
ÁNGELA MARÍA PUERTA CÁRDENAS

Manizales, diez (10) de abril del dos mil veinticuatro (2024).

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de los promotores frente al auto proferido el 15 de diciembre de 2023 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, Caldas, dentro del proceso declarativo adelantado por los señores Ana Catalina Patricia del Pilar y Francisco Antonio Jorge Alfonso Hormaza Quesada en su calidad de herederos determinados del causante Francisco Antonio Hormaza Mesa contra los señores Myriam Vargas Montealegre, Óscar Enrique Ormaza Meza, Andrés Felipe Pineda Gallo, Laura Camila Rincón Rincón y Leidy Clemencia Clavijo Giraldo.

II. ANTECEDENTES

2.1. A través del libelo genitor, instaron los demandantes que previo agotamiento del procedimiento pertinente, se emitiera sentencia de fondo disponiendo: **i)** la declaración de inoponibilidad de las compraventas insertas en las E.P. Nos. 2546 de 2022, 997 y 1039 del 2023, corridas todas en la Notaría Única de La Dorada Caldas; **ii)** que se declarara que los predios enajenados en los precitados instrumentos, reseñados con los F.M.I. 103-33105 y 103-33108 de la Oficina de Registro del Instrumentos Públicos de La Dorada, Caldas, hacen parte de la sociedad patrimonial conformada entre el *de cujus* Francisco Antonio Hormaza Mesa y la codemandada Myriam Vargas Montealegre, cuya disolución operó con el deceso del compañero; **iii)** declarar que en el *sub júdice* medió la venta de cosa ajena al haber dispuesto la compañera de los bienes sociales sin la liquidación previa del patrimonio común, por ende que ella únicamente pudo transferir a su comprador Óscar Enrique Ormaza Meza la mera tenencia que detentaba en nombre del haber social, mientras que este último transmitió solo dicho derecho a los terceros compradores Andrés Felipe Pineda Gallo, Laura Camila Rincón Rincón y Leidy Clemencia Clavijo Giraldo; **iv)** que en caso tal de haberse presentado respecto de los tres últimos la interversión del título de meros tenedores al de poseedores, se decretara la reivindicación de las heredades afectadas a favor de la masa social; **v)** se cancelaran los registros derivados de las compraventas comentadas; **vi)** se condenara a los demandados en costas procesales.

Dentro de los hechos en que se fundó el reclamo judicial, indicó el mandatario que en curso del proceso de declaración de unión marital de hecho instaurado por sus representados contra la señora Vargas Montealegre en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de La Dorada, Caldas, con el fin de obtener tanto el reconocimiento del vínculo factual, como la disolución y liquidación de la

subsiguiente sociedad patrimonial de hecho, se percataron de que la convocada había vendido al señor Óscar Enrique Ormaza Meza los inmuebles ubicados en el Conjunto Residencial Palma Real de tal localidad, mediante la Escritura No. 2546 de 2022, desconociendo que estos pertenecen al haber social que se disolvió con ocasión del fallecimiento del compañero, tratándose pues de una venta de cosa ajena. Los referidos predios, fueron a su vez enajenados a los codemandados Andrés Felipe Pineda Gallo, Laura Camila Rincón Rincón y Leidy Clemencia Clavijo Giraldo, negocios jurídicos que resultan inoponibles a los demandantes en la medida que no enervan los derechos que le corresponderían al extinto consorte en la liquidación de la masa patrimonial, de manera que si tales sujetos por alguna razón se reputan poseedores, están en la obligación de restituirlos a favor de aquella[1].

2.2. Asignado el conocimiento al Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, en reparto verificado el día 9 de octubre de 2023[2], a través de providencia datada 27 de noviembre siguiente[3] inadmitió la demanda requiriendo enmendar las deficiencias avizoradas frente a: **i)** la escasez del sustrato fáctico de la acción en torno a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los negocios jurídicos atacados; **ii)** la necesidad de *"readecuar"* los pedimentos incluyendo los de índole declarativa, a la par de *"expresar con suficiencia y claridad lo que se pretende con el presente proceso"*; **iii)** lo indispensable de clarificar la cuantía del asunto de acuerdo a la naturaleza de la pretensión; en tratándose de la impugnación de las ventas determinarlas por su monto o, de ser la reivindicación de los predios, por su avalúo catastral que debía aportarse; **iv)** la inclusión del juramento estimatorio en aplicación del artículo 206 C.G.P.; **v)** la explicación del tipo de proceso a adelantarse "*dado que no esta (sic) especificado (sic) la cuerda procesal para ventilar sus aspiraciones.".*

2.3. Dentro del término concedido, la parte demandante aportó memorial en el cual adujo haber integrado el libelo en un nuevo escrito atendido a las correcciones solicitadas por el fallador primario[4]; empero, por auto del 15 de diciembre hogaño, el Despacho rechazó la acción, considerando que: *"no cumplió con los requerimientos efectuados en el auto que inadmitió la demanda, toda vez que los hechos, ni pretensiones fueron adecuados conforme lo solicitado, tampoco se estimo* (sic) *la cuantía en debida forma en la forma explicitada en el auto inadmisorio, no se realizó el juramento estimatorio y no indicó el tipo de proceso verbal que se pretendía adelantar"*[5].

2.4. Contra la antedicha decisión, el 11 de enero de 2024 la parte actora hizo uso del recurso de apelación, para lo cual en síntesis sostuvo que la adecuación de la demanda se hizo de la forma ordenada por el Juzgado, puesto que: **i)** no estaba en la obligación de prestar juramento estimatorio; **ii)** fue clara al señalar que el proceso a seguir correspondía a un verbal de conocimiento, ratificando que sus pretensiones

---

[1] Archivo 02 Cdno. Ppal.
[2] Archivo 01 ibidem
[3] Archivo 03 ídem
[4] Archivo 04 Cdno. 01
[5] Archivo 05 ídem

de índole declarativa concernían a la inoponibilidad de los contratos de venta, el pronunciamiento judicial en el sentido que las heredades objeto de estos en realidad eran de la sociedad patrimonial y la reivindicación de aquellas a favor de la masa social, pretensiones acumulables para zanjarse en la senda verbal acorde el artículo 368 C.G.P.; **iii)** la cuantía emergía determinable a partir del cálculo del valor total del *petitum*, de lo que dan cuenta las Escrituras Públicas que instrumentan las transacciones en la suma de $108.000.000, mientras que la de la reivindicación se fijaría conforme el avalúo catastral de los predios señalados por el notario en la página primera de cada acto notarial en la suma de $396.000.000 correspondiente al predio de mayor extensión, debidamente certificada por la autoridad competente[6]; argumentos los reprodujo en memorial allegado el 1 de abril hogaño, encontrándose el cartulario en esta sede 7.

2.5. En auto del 11 de marzo de 2024, el juzgado cognoscente anunció resolver *"el recurso de reposición en subsidio de apelación"*, no obstante únicamente concedió la alzada sin señalar en qué efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Problema Jurídico

De cara a los reclamos esbozados por el extremo divergente, corresponde a la Sustanciadora definir si la subsanación allegada ante el Juzgado primario devenía suficiente para dar por superadas las falencias advertidas en el auto inadmisorio en lo tocante con los puntos allí descritos, en especial lo relativo a la debida determinación de las pretensiones y la cuantía del asunto de conformidad a estas.

3.3. Supuestos normativos

3.3.1. Es sabido que el artículo 90 del Código General del Proceso, regula lo concerniente a la admisibilidad y rechazo del libelo inaugural, estipulando en primer lugar que el juez adoptará el último proceder *in límine* en caso de carecer de jurisdicción o competencia para tramitarla. Seguidamente, indica que mediante auto no susceptible de reposición, se inadmitirá cuando: **(i)** no reúna los requisitos formales; **(ii)** no se acompañen los anexos ordenados por la ley; **(iii)** las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales; **(iv)** (…) el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante; **(v)** (…) quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso; **(vi)** (…) no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario; o, **(vii)** (…) no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

Por su parte, el artículo 82 ibidem, aborda los requisitos de la demanda, contraídos a: **(i)** la designación del juez destinatario; **(ii)** el nombre y domicilio de las partes, al igual que el de sus representantes en caso que no puedan comparecer por sí mismas; **(iii)** el nombre del mandatario demandante, si se requiere; **(iv)** lo

---

[6] Archivo numerado erróneamente como *"05RecursoApelación"* del Cdno. Ppal.

pretendido, expuesto con claridad y precisión; **(v)** los hechos que soportan lo anterior; **(vi)** la solicitud de las pruebas que pretendan hacerse valer; **(vii)** el juramento estimatorio si así imperase; **(viii)** los soportes normativos de lo pedido; **(ix)** la cuantía del asunto; **(x)** la dirección física o electrónica de las partes; y **(x)** los demás que, conforme cada caso, exija la legislación aplicable.

3.3.2. De cara a lo que será objeto de análisis, indispensable es destacar la interrelación que necesariamente debe obrar entre los hechos de la demanda con sus pretensiones, en tanto los primeros son los que sirven de bastión a los últimos que acorde el numeral 4° de la norma que viene de verse, han de estar expuestos con la nitidez y precisión indispensables a propósito de verificarse que el Juez pueda pronunciarse válidamente al respecto.

No sobra memorar que en la hipótesis de haber diversos pedimentos, el artículo 88 del Estatuto Procesal Civil consagra la posibilidad de acumularlos cuando se formulan por uno o varios demandantes y contra uno o varios demandados, si se presenta la identidad en la causa o de objeto, se hallan en situación de dependencia o deben servirse de un mismo caudal probatorio, propósito al cual debe igual constatarse: **a.** que el funcionario judicial sea competente para conocer de todas las solicitudes; **b.** que las mismas no se excluyan entre sí, excepto si se formulan como principales y subsidiarias; y, **c.** que puedan tramitarse por el mismo procedimiento.

3.3.3. Finalmente, en punto de la cuantía, se advierte que además de ser una exigencia expresa prescrita por el numeral 9° del artículo 82 C.G.P, se erige en parámetro definitorio de la competencia del funcionario *-en los eventos que no se atribuya debido a la naturaleza misma del proceso-* y debe determinarse en la forma enseñada por el canon 26 ídem, por regla general *"Por el valor de todas las pretensiones al tiempo de la demanda (…)"*. Tratándose de asuntos que versan sobre el dominio o la posesión de bienes, indica el numeral 3 de la norma citada *"(…) por el avalúo catastral de éstos (…)"* información que se obtiene de los documentos oficiales.

3.4. Supuestos fácticos

Para despachar lo que en derecho corresponda en el *sub judice,* menester es recordar que las razones que llevaron al *a-quo* a inadmitir y posteriormente rechazar la demanda, a grandes rasgos reposan en la inadecuada descripción del contorno fáctico que rodeó la celebración de los negocios jurídicos atacados, la presunta inexactitud de lo pretendido mediante el proceso, la ausencia del juramento estimatorio, la indebida determinación de la cuantía del asunto y la supuesta falta de señalamiento del procedimiento que debe imprimirse a la acción.

A juicio del extremo recurrente, la decisión mencionada brota desacertada ya que a través de la subsanación se allanó a acatar el cúmulo de exigencias emanadas del Despacho; inferencia que esta Magistratura comparte, aunque solo de manera parcial, pues si bien es cierto que le asiste razón en varios de sus argumentos, no lo es menos que aun con la corrección, omitió arrimar los soportes valuatorios de los predios que condujeran a comprender su precio catastral, amén que para

resolver la pretensión reivindicatoria, conforme el sustrato fáctico narrado, podría no ser competente el Juzgado de la especialidad civil.

En efecto, visto el escrito correspondiente emerge patente que las compraventas cuya inoponibilidad se predica, se hallan debidamente explicitadas en los numerales 6 y 8 de los hechos contenidos en el Archivo 04 *-pese a que se omitió arrimar las escrituras que se anunciaron anexas como pruebas y que mostrarían sin lugar a duda la realidad de las transacciones realizadas-*; tampoco estaban los promotores compelidos a prestar juramento de que habla el artículo 206 del Estatuto Procesal, como quiera que sus solicitudes no se dirigieron al *" (…) reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras (…)",* lo cual demuestra el estudio ligero que se hizo del libelo; mucho menos se habilitaba al funcionario cognoscente para exhortar a la parte a que indicara cuál era *"el tipo de proceso verbal"* a adelantar, en tanto ello contraría abiertamente el principio *iura novit curia* según el cual es el Juez quien conoce el derecho aplicable, máxime cuando en el de marras es palpable que la senda adjetiva es la efectivamente señalada por el abogado de los señores Hormaza Quesada, esto es, el proceso verbal del artículo 368, destinado a *"todo asunto contencioso que no esté sometido a un trámite especial".*

Sin embargo, analizando en su integridad la multicitada pieza procesal *-es decir conjugando los hechos de la demanda de cara a los ruegos incoados-*, se comprueba que, distinto a lo alegado por el profesional, ni de ella, ni de sus documentos anexos se desprende con claridad lo pretendido, ni que el *petitum* pueda acumularse.

Esto es así considerando que conforme al componente factual narrado, lo que se busca en el *sub lite,* además de la declaratoria de inoponibilidad a los demandantes de las enajenaciones otrora realizadas por la señora Myriam Vargas Montealegre al señor Óscar Enrique Ormaza Meza y por parte de este a los señores Andrés Felipe Pineda Gallo, Laura Camila Rincón Rincón y Leidy Clemencia Clavijo Giraldo -*pretensión de índole civil-*, es la disposición sobre la propiedad de las heredades vendidas *-que se aducen de la sociedad patrimonial ilíquida-* y el reintegro de los predios a favor de la masa social conformada en virtud de la unión marital en su momento sostenida entre los compañeros Francisco Antonio Hormaza Mesa y la codemandada Vargas Montealegre, súplicas que bien pueden asemejarse a una reivindicación de los gananciales que en vida correspondían al compañero, la del heredero sobre cosas hereditarias e incluso al litigio sobre la propiedad de los bienes *-cuando se discuten si son del compañero o de la sociedad-* o al alzamiento o distracción de activos sociales, debates que son propios de la competencia asignada por el ordenamiento a la jurisdicción ordinaria en su especialidad familia acorde los numerales 18, 16 y 22 del artículo 22 del Código General del Proceso[7].

---

[7] "*Los jueces de familia conocen, en primera instancia, de los siguientes asuntos: (…) 16. Del litigio sobre propiedad de bienes, cuando se discuta si estos son propios del cónyuge o del compañero o compañera permanente o si pertenecen a la sociedad conyugal o patrimonial. (…) 18. De la reivindicación por el heredero sobre cosas hereditarias o por el cónyuge o compañero permanente sobre bienes sociales. (…) 22. De la sanción prevista en el artículo 1824 del Código Civil."*

Dicho en otras palabras, atendiendo a que el estudio completo de la demanda impone verificar el nexo que conecta el contorno fáctico del proceso con lo que a través de su formulación se persigue, en el tema traído a esta instancia se advierte que la acción carece de nitidez en cuanto a lo pretendido, en el sentido que los fundamentos de hecho se dirigen no solo a la ineficacia de las ventas frente a los demandantes en su condición de herederos determinados del extinto Francisco Antonio, sino igualmente a la *"fraudulenta"* disposición o indebida sustracción por la ex compañera Myriam de las heredades que en realidad pertenecían al haber social, hecho a partir del cual se efectuaron transferencias a terceros, a quienes busca exigírseles la reivindicación, aún sin tenerse claro si detentan la posición de poseedores; se está pues en el entremezclamiento de un tópico civil con otro inherente al derecho de familia.

Todo esto para significar que pese a que la motivación del *a-quo* en lo tocante con la inexactitud del *petitum* fue exigua, en verdad es posible establecerla en esta instancia por las razones explicitadas, pues los hechos lejos de respaldar las pretensiones como manda el numeral 5° del precepto 82 C.G.P., generan cierto grado de confusión que justificaba la inadmisión y consecuente rechazo de la demanda al no haberse clarificado en debida forma el asunto.

De otra parte, en lo que concierne a la cuantía del proceso, refulge que, examinado el *dossier* a saciedad, no se encuentra dentro de los anexos del archivo 02 los cartularios mencionados por el apoderado judicial, esto es, los instrumentos públicos -*E.P. de compraventa, ni certificaciones de la Secretaría correspondiente a la primera autoridad municipal*- que permitirían establecer el valor catastral de los predios cuya reintegro o reivindicación a la masa social se busca, ni es dable inferir lo sucedido frente a la situación a que refiere el letrado en el entendido que los lotes 02 número 231B y 05 número 231 E, no se hallan catastralmente segregados del predio de mayor extensión.

Ante la ausencia de elementos que conduzcan a elucidar lo indicado y siendo el señalamiento de la cuantía procesal un requisito para la admisión de la demanda al abrigo del No. 9 del invocado canon 82 C.G.P. lo procedente era la inadmisión y persistiendo el yerro, el rechazo.

3.5. Conclusión

Conforme lo discurrido, forzoso resulta confirmar la determinación confutada, toda vez que la parte interesada no cumplió en su totalidad con las cargas que legalmente se le exigieron en el auto inadmisorio.

3.6. Costas

Sin condena en costas en esta instancia por no encontrarse causadas, de conformidad con el No. 8 del artículo 365 del C.G.P.

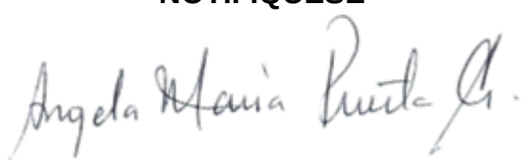
IV. DECISIÓN

Por lo anterior, la Magistrada Sustanciadora del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala de Decisión Civil-Familia, **CONFIRMA**, por las precisas razones esbozadas en el aparte considerativo, el auto datado 15 de diciembre de 2023 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, Caldas, dentro del proceso declarativo adelantado por los Ana Catalina Patricia del Pilar y Francisco Antonio Jorge Alfonso Hormaza Quesada en su calidad de herederos determinados del causante Francisco Antonio Hormaza Meza contra los señores Myriam Vargas Montealegre, Óscar Enrique Ormaza Meza, Andrés Felipe Pineda Gallo, Laura Camila Rincón Rincón y Leidy Clemencia Clavijo Giraldo.

Sin costas en esta instancia.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE



ÁNGELA MARÍA PUERTA CÁRDENAS
Magistrada

Firmado Por:
Angela Maria Puerta Cardenas
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 6 Civil Familia
Tribunal Superior De Manizales - Caldas

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c3597a95cf30625ddd13fe7a83649f55de2ed0808f10ff32afdda0dc12af6ff3**
Documento generado en 11/04/2024 11:31:10 a. m.

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
https://capacitacion.ramajudicial.gov.co:9443/FirmaElectronica